

HUELGAS

LAS violentas sacudidas sociales en Gran Bretaña no terminan con la negociación entre el gobierno y los empleados de Correos, que debe poner fin a una de las huelgas más largas y más costosas de la historia del país. Los cincuenta mil obreros de las fábricas Ford continúan en paro, que puede extenderse a otras fábricas de automó-

Tom Jacson, secretario general de la Unión de Trabajadores de Correos, con F. J. Bines (izquierda) y H. R. Varcoe (de pie), secretario y presidente, respectivamente, del Comité de la Unión, analizan los resultados de la votación por la que se puso fin a la huelga de Correos.



viles; los ferroviarios han rechazado las últimas propuestas gubernamentales y pueden votar la declaración de huelga. El telón de fondo de estos conflictos, que ya se han hecho continuos, es más importante que el de las inmediatas mejoras salariales y laborales solicitadas por los obreros: es una guerra entre el sindicalismo y el gobierno conservador, con un enfrentamiento político del tipo izquierda-derecha y con viejas motivaciones enraizadas en la historia reciente del país. Su aspecto inmediato es el de la lucha sindical contra la ley antihuelgas, llevada con tal pasión que su autor, el ministro de Empleo y Productividad, fue víctima en enero de un atentado terrorista. Carr había explicado en el Parlamento un mes antes, defendiendo su proyecto de ley, que era preciso que «los individuos y las colectividades restrinjan sus acciones reivindicativas cuando éstas afecten a otros individuos o a otras colectividades» y, en general, el gobierno Heath sostiene la idea de que la grave crisis económica por que atraviesa el país es consecuencia de la larga y profunda ola de huelgas. La cuestión, como se ve, está en una clara disyuntiva derecha-izquierda. La derecha gobernante entiende que la huelga es una ofensa a la libertad de los otros y un daño para la economía nacional, mientras la izquierda en la oposición entiende que la verdadera ofensa a la libertad reside en la restricción del derecho de huelga, considerada por ellos como la única arma defensiva posible frente a un capitalismo de voracidad y fuerza crecientes, y estima que la huelga no es la causante de la crisis económica, sino que, por el contrario, la crisis la precede —como consecuencia del desarrollo sin límites del sistema capitalista— y se trata siempre de resolverla haciendo pesar la mayor parte de las restricciones y las medidas de autoridad sobre la clase trabajadora —bloqueo de salarios, aumento forzado de la productividad, aumento de la mano de obra de importación—, que no tiene más defensa que la huelga, puesto que todos sus intentos de negociación se ven cortados por las negativas patronales (en una gran parte de los casos, el Estado actúa como patrón, por las industrias y servicios nacionalizados). En cuanto al daño ocasionado a la mayoría, para los sindicatos es una expresión que carece de sentido: la mayoría es la clase obrera, y ésta acepta ser afectada por las huelgas, puesto que ellas forman parte de un contexto general de lucha (idea que no siempre se ve confirmada por la realidad).

UNA de las raíces históricas de esta controversia está en la misma fundación de los sindicatos británicos (Trade Unions Congress) en 1868, y en las luchas por las organizaciones sindicales a partir del siglo XVIII. Puede resumirse la cuestión planteada durante tantos decenios, de esta manera: la tendencia de que las asociaciones obreras deberían ser apolíticas y no pretender el acceso al poder, sino luchar directa y concretamente por la mejora de las condiciones de trabajo venció sobre la tesis de que únicamente la conquista del poder podía beneficiar al trabajador, puesto que la instrumentación de fuerza y la capacidad de maniobra y resistencia de que dispone el poder puede siempre dominar a las clases trabajadoras. Esta última era la idea de Marx, y, en consecuencia, las clases trabajadoras británicas se apartaron del marxismo. Quizá no tanto por convicción en su propia doctrina como por posibilismo: el sindicalismo apolítico, a pesar de los muchos obstáculos y dificultades con que tropezó, podía ir saliendo adelante, mientras que, claramente, la conquista del poder hubiese sido cortada de raíz. Sin embargo, la necesidad del acceso al poder se fue haciendo notar con el tiempo. Fue así como nació el partido laborista de un costado de las Trade Unions y con su dinero. Un ple del Labour estaba puesto en la federación sindical; el otro, en los intelectuales idealistas de la sociedad fabiana, de reformistas y evolucionistas sin



La huelga de Correos, como la de las fábricas Ford o la de ferroviarios, es un episodio de la guerra que se libra en Gran Bretaña entre el sindicalismo y el gobierno conservador.

prisas y sin revoluciones (Fabio Cunctator, de quien tomaron su nombre, era un general romano famoso por la lentitud de su estrategia, de donde su sobrenombre de Cunctator, «parsimonioso»), de donde salió un socialismo no marxista, incluso antimarxista y, finalmente, anticomunista. Una de las contradicciones, y quizá no la mayor, de este sistema estaba en la diferencia de ritmos de sus bases. Mientras los obreros reclamaban las urgencias de sus reclamaciones de clase, los políticos requerían el largo y lento paso del tiempo. Mientras las Trade Unions Congress se proclaman apolíticas, de sus arcas se nutre un partido político.

ESTE juego de contradicciones se ha puesto de manifiesto, sobre todo, en el largo período de poder del partido laborista —Harold Wilson—, finalmente renegado del socialismo —renuncia a las nacionalizaciones, defensa de la libra y de los últimos jirones del Imperio, colaboración con los Estados Unidos— y hasta enfrentado con la clase obrera en los conflictos laborales. Para encubrirlos, Wilson inventó la expresión de «huelgas salvajes» —que, naturalmente, tanto éxito

había de tener en otros países de la democracia semántica mundial— para denunciar los movimientos de reivindicación como no emanados oficialmente de los sindicatos, acusó de ellas a los comunistas, y finalmente su ministro de Trabajo, Barbara Castle, produjo un proyecto de ley antihuelgas que en el fondo es el mismo que emite ahora el gobierno conservador, con algunas variantes de matiz y lenguaje, y que no tuvo ocasión de colocarse por la derrota electoral laborista. Con esta derrota, con el paso al infierno de la oposición, Wilson y sus laboristas se encontraron repentinamente más cerca de los sindicatos. Ya no calificó las huelgas de salvajes, ya no acusa a los comunistas y, en fin, se enfrentan en el Parlamento con la ley antihuelgas.

EL gobierno Heath, más coherente, no ha tratado de disfrazar su conservadurismo. Llegó con un programa de «ley y orden» —fortalecimiento de la Policía y de los magistrados— y lo mantiene —aunque en realidad no haya habido un solo día real de ley y orden en el país desde que, en junio, tomaron el poder los conservadores—, se alzó contra las huelgas —también puede verse que el resultado no es real—, intimó con los Estados Unidos, envía armas a Rhodesia y África del Sur, aprueba las leyes contra los inmigrantes de color, expulsa sin defensa a los extranjeros desagradables —el último caso, el de Rudi Dutschke— y busca la solidez y la expansión de los capitales británicos en el Mercado Común Europeo. En realidad puede decirse que este gobierno conservador es una simple continuidad acentuada del gobierno laborista, sólo que sin máscaras y sin caretas. Hasta el estilo autocrático y un poco despectivo para con algunas libertades individuales no es más que el que ya había inaugurado Wilson. No por ello, la situación ha mejorado desde ningún punto de vista.

PERO desde la oposición, y aun a pesar de sus coincidencias verbales con el sindicalismo, Harold Wilson no deja de maquinarse su propio futuro de primer ministro turnante. La ley antihuelgas no le es excesivamente desagradable: promulgada por los conservadores, puede serle útil a los laboristas más adelante. Pero está manejando las huelgas actuales con mucho cuidado. Son, por una parte, de gran eficacia para minar el poder actual, pero pueden ser arriesgadas si realmente afectan de manera desfavorable a la opinión pública. Se está dibujando una imagen de los sindicatos como «tiranos», que puede perjudicar a la anterior de «defensores de los oprimidos».

POR otra parte, se están gastando el dinero. La principal defensa del sistema contra las huelgas no está en la ley, en la Policía y en los magistrados, sino en el desgaste de las cajas sindicales. En algunas huelgas recientes occidentales —muy concretamente en Francia— se ha podido observar que los patronos resultaban, a la larga, beneficiados: el cierre de sus fábricas les permitió sacar a la venta los productos almacenados, que parecían ya destinados a perecer por la evolución de formas propias de la sociedad de consumo, con un beneficio claro, mientras las concesiones hechas en materia salarial se enjugaban después con aumentos de precio (por eso los obreros franceses, más educados política y económicamente, se negaban, en mayo de 1968, a la firma de protocolos con mejoras salariales: sabían que más tarde serían absorbidas por los aumentos de precios, y reclamaban, por consiguiente, sistemas de participación directa en la gestión y los beneficios de las empresas). En los casos del Estado-patrono, las pérdidas por días de huelga emergen con cierta facilidad de las cajas presupuestarias. En todo caso, para quien es más difícil la resistencia en casos de huelga prolongada es para los sindicatos. Las cajas se vacían en el abono de los subsidios de huelga a los obreros parados —que cesan automáticamente de cobrar en sus empresas—, y estos subsidios son forzosamente bajos, apenas alcanzan un simple nivel de subsistencia.

EN este caso, el partido laborista teme la prolongación de esta situación no sólo porque se derrumben las huelgas por falta de resistencia, sino porque ese dinero puede necesitarlo para unas elecciones anticipadas. Se rumorea que Heath, creyendo que atraviesa un buen momento de opinión pública, convocaría elecciones para este mismo año, que le permitieran ampliar su mayoría parlamentaria y reducir aún más la fuerza laborista; sin el dinero de los sindicatos, esa campaña sería difícil para Wilson. Estas son algunas de las razones que han movido al final de la huelga de correos. Pero difícilmente todo el proceso social que está en marcha podrá sujetarse. La crisis económica profunda, desde la pérdida de la hegemonía de Occidente y de los beneficios imperiales, no ha sido nunca sustituida por una política económica moderna; los retoques de precios y salarios que han de hacerse para la entrada en el Mercado Común (la alternativa de no entrar parece peor) agudizarán la situación, y los esquemas de «ley y orden» no pasan de ser retóricos en un tiempo en que poco a poco —pero quizá en la Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Francia con más fuerza que en otros países occidentales— la retórica como poder se va desgastando día a día.